

RECOMENDACIÓN NO. 97 VG/2023

SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO, POR ACTOS DE TORTURA EN AGRAVIO DE VD, POR ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2023

**GENERAL LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Apreciable señor Secretario:

1. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º párrafos primero, segundo y tercero, y 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º primer párrafo, 6º fracciones I, II, III y XV, 15 fracción VII, 24 fracción II y IV; 26, 41, 42, 44, 46 y 51, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como, 88, 128 a 133 y 136 de su Reglamento Interno, ha examinado las evidencias del expediente **CNDH/2/2022/4102/VG**, iniciado con motivo de la queja presentada por Q1, Q2 y VI, consistente en actos de tortura por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas que intervinieron en los hechos que se abordan y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, en términos de lo establecido en el artículo 6º, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículo 4º, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 78, párrafo primero y 147, de su Reglamento Interno; 68 fracción VI, y 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 1, 3, 9, 11, fracción VI, 16, 113, fracción I, y párrafo último, así como 117, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 6, 7, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Dicha información se pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada, a través de un listado adjunto en el que se describe la correspondencia de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes.

3. Para una mejor comprensión del presente documento, el glosario de las claves y denominaciones abreviadas utilizadas para distintas personas involucradas en los hechos, son las siguientes:

Denominación	Clave
Persona Víctima Directa	VD
Persona Víctima Indirecta	VI
Persona Quejosa	Q
Perito Médico Forense	PMF
Persona Ministerio Público Federal	MPF
Persona Autoridad Responsable	AR
Persona Servidora Pública	PSP

4. A lo largo del presente documento, la referencia a distintas dependencias e instancias de gobierno y organismos autónomos se hará con siglas, acrónimos o

abreviaturas, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante repetición, los cuales podrán ser identificados como sigue:

Institución o dependencia	Siglas, acrónimo o abreviatura
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	Comisión Nacional u Organismo Nacional
Entonces Procuraduría General de la República (en la temporalidad de los hechos)	PGR
Fiscalía General de la República	FGR
Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México	Juzgado Primero de Distrito
Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México	Juzgado Tercero de Distrito
Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México	Juzgado Sexto de Distrito
Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, sede Tijuana	Juzgado Decimotercero de Distrito
Primer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en Culiacán, Sinaloa	Primer Tribunal Unitario
Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito	Segundo Tribunal Unitario
Juzgado Cuarto de lo Penal en la Ciudad de Tijuana, Baja California	Juzgado Cuarto

Institución o dependencia	Siglas, acrónimo o abreviatura
Juzgado Quinto de lo Penal en la Ciudad de Tijuana, Baja California	Juzgado Quinto
Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México	CEFERESO 1
Centro Federal de Readaptación Social Número 5, Oriente, en Gómez Palacio, Durango	CEFERESO 5
Suprema Corte de Justicia de la Nación	SCJN
Corte Interamericana de Derechos Humanos	CrIDH
Organización de las Naciones Unidas	ONU

5. Antes de entrar al análisis y estudio de las violaciones a derechos humanos del expediente de queja **CNDH/2/2022/4102/VG**, esta Comisión Nacional estima conveniente precisar que, si bien los hechos ocurrieron en [REDACTED] los actos violatorios de derechos humanos consisten en actos de tortura en agravio de VD, por lo que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de esta Comisión Nacional, en relación con el 88 de su Reglamento Interno, no se encuentra sujeto a plazo alguno para su indagación, por tanto, resultó procedente la integración del expediente de queja, la investigación de las violaciones graves a derechos humanos y la presente determinación.

I. HECHOS

6. El 21 de abril de 2022 y el 4 de mayo de 2022, se recibió en esta Comisión Nacional, el escrito de queja y ampliación de queja, respectivamente, suscritos por Q1, Q2 y VI, en el cual se expuso que, [REDACTED] VD ingresó al cuartel militar en el 28/o Batallón de Infantería, ubicado en Aguaje de la Tuna en Tijuana, Baja California, lugar en el que fue torturado, mediante la [REDACTED]; cesando dichos actos en el momento en que VD se incriminó de diversos delitos.

7. Fue trasladado el 28 de abril de 2008 a instalaciones de la entonces PGR, Delegación Tijuana, Baja California, en donde rindió su declaración, posteriormente fue trasladado al CEFERESO 1.

8. Por lo anterior, Q1, Q2 y VI solicitaron a esta Comisión Nacional su intervención a fin de investigar sobre las probables violaciones a derechos humanos en agravio de VD. En consecuencia, se inició el expediente **CNDH/2/2022/4102/VG**, para realizar la investigación correspondiente, a fin de resolver en relación con violaciones graves a derechos humanos, para ello se realizaron diversas actuaciones, entre las cuales se solicitó información a la SEDENA, cuya valoración lógica jurídica será considerada en el capítulo de Observaciones y Análisis de las Pruebas de la presente Recomendación.

II. EVIDENCIAS

9. Escrito de queja de Q1 y Q2, recibido en esta Comisión Nacional el 21 de abril de 2022, en el que indica que VD, fue torturado por elementos de la SEDENA.

10. Escrito de ampliación de queja de VI, recibido en este Organismo Nacional el 04 de mayo de 2022, mediante el cual manifestó que VD fue sujeto a actos tortura por sus captores, elementos de la SEDENA.

11. Oficio DH-I-9226, de 22 de agosto de 2022, mediante el cual la SEDENA, rindió un informe sobre los hechos materia de la queja, al que adjuntó un Certificado Médico emitido por AR2, de 27 de abril de 2008, en relación con VD, que indica: *“Habiendo concluido la presente valoración médica, del día 27 de abril del año 2008 y de conformidad con los datos antes descritos se opina que el presente caso que las mismas no ponen en peligro la vida y tardan más de quince días”*.

12. Oficio FEMDH/DGPCDHQI/1194/2022, de 29 de agosto de 2022, mediante el cual la FGR presentó un informe sobre la detención de VD, al que anexó el diverso 128/2022, de 10 de agosto de 2022, en el que informa sobre la Averiguación Previa, la cual fue consignada el 19 de julio de 2008, radicándose la Causa Penal 2.

13. Oficio 5003/2022, de 28 de septiembre de 2022, suscrito por el Juzgado Tercero de Distrito, por el cual informa el inicio de la Carpeta de Investigación, relativa a los probables actos de tortura en contra de VD.

14. Acta Circunstanciada de 30 de septiembre de 2022, elaborada por personal de esta Comisión Nacional, en la cual se hizo constar la recepción de dos correos electrónicos del 28 de ese mes y año, por PSP1, mediante el cual remitió los siguientes documentos:

14.1 Oficio 4813/2022, de 20 de septiembre de 2022, a través del que informa el estado procesal de las Causas Penales 1 y 2.

14.2 Dictamen Médico Forense Especializado, para determinar un posible o probable caso de maltrato cruel, inhumano y degradante tanto físico como mental, conocido técnicamente como actos de tortura, de 7 de junio de 2012 suscrito por PMF, donde se analizaron los padecimientos y sintomatologías que presentó VD, derivados de las circunstancias que atravesó al momento de su detención; dicho documento fue presentado ante el Juzgado Sexto de Distrito, el 26 de julio de 2012.

14.3 Acuerdo del Juzgado Sexto de Distrito, de 9 de noviembre de 2016, por el que se da vista al MPF sobre los actos de tortura en agravio de VD.

14.4 Sentencia definitiva de la Causa Penal 1, de fecha 9 de noviembre de 2021, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito, relacionada con VD.

14.5 Sentencia condenatoria del Toca Penal 1, de 21 de abril de 2022, dictada por el Primer Tribunal Unitario, relacionada con VD.

15. Acta circunstanciada de 13 de octubre de 2022, elaborada por personal de esta Comisión Nacional, en la que consta la entrevista realizada a VD en el CEFERESO 5, quien describió la forma en que los elementos de la SEDENA lo detuvieron y torturaron, ocasión en la que se obtuvo la Partida Jurídica del expediente VA/16902/2017 de 13 de octubre de 2022, emitida por la Dirección Jurídica del CEFERESO 5.

16. Acta Circunstanciada de 14 de noviembre de 2022, elaborada por personal de este Organismo Nacional, en la que consta la consulta que se realizó de la Averiguación Previa, iniciada con motivo de la puesta a disposición de VD ante la PGR.

17. Acta Circunstanciada de 29 de marzo de 2022, elaborada por personal de este Organismo Nacional, en la que se hizo constar comunicación telefónica que se realizó con personal de la FGR, mediante la cual se informó que la Carpeta de investigación que se inició por el delito de tortura en agravio de VD, se encuentra en trámite a la fecha del día referido.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

18. El 28 de abril de 2008, derivado de la detención de VD por elementos de la SEDENA, y su puesta a disposición ante el MPF de la Delegación Tijuana, Baja California, se inició la Averiguación Previa, la cual se consignó ante el Juzgado Decimotercero de Distrito, se resolvió la orden de aprehensión de VD, quien quedó interno en el CEFERESO 1, razón por la que, mediante exhorto, el Juzgado Decimotercero de Distrito solicitó al Juzgado Primero de Distrito tomar la declaración preparatoria y resolver la situación jurídica de VD.

19. El 23 de julio de 2008, el Juzgado Primero de Distrito decretó auto de formal prisión en contra de VD por diversos delitos.

20. El 12 de noviembre de 2008, el Juzgado Decimotercero de Distrito, declinó competencia a favor del Juzgado Sexto de Distrito.

21. El 17 de julio de 2017, el Juzgado Sexto de Distrito, en acatamiento a la resolución emitida en el Juicio de Amparo Indirecto, dictada por el Segundo Tribunal Unitario, declinó competencia en relación con delito diverso; competencia que fue aceptada por el Juzgado Quinto.

22. El 4 de octubre de 2018, el Juzgado Quinto, informa que la Causa Penal 2 se encuentra en periodo de instrucción.

23. Mediante proveído de 18 de octubre de 2019, en cumplimiento al acuerdo 12/2019 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Juzgado Sexto de Distrito, el técnico de enlace administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales turnó los autos de la causa al Juzgado Tercero de Distrito de la Causa Penal 1.

24. El 18 de julio de 2021, el Juzgado Cuarto decretó la extinción del Juzgado Quinto; ordenándose turnar la Causa Penal 2 al Juzgado Cuarto.

25. El 09 de noviembre de 2021, el Juzgado Tercero de Distrito dictó sentencia condenatoria en contra de VD.

26. El 21 de abril de 2022, el Primer Tribunal Unitario resolvió el Toca Penal 1, integrado con la apelación que interpuso VD en contra de la sentencia condenatoria dictado por el Juzgado Tercero de Distrito, confirmando la sentencia.

27. Por tal motivo, se inició la Carpeta de investigación por el delito de tortura en agravio de VD, la cual se encuentra a la fecha del presente instrumento recomendatorio, en trámite.

IV. OBSERVACIONES Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS

28. Antes de entrar al estudio de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en agravio de VD, esta Comisión Nacional precisa que carece de competencia para conocer y pronunciarse de asuntos jurisdiccionales, en términos de los artículos 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción II, y 8, última parte, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 2 fracción IX, incisos a), b) y c), de su

Reglamento Interno, por lo cual no se pronuncia sobre las actuaciones realizadas en las Causas Penales, instruidas en contra de VD, sino única y exclusivamente por las violaciones a derechos humanos acreditadas.

29. Esta Comisión Nacional ha señalado que se debe investigar, procesar y, en su caso, sancionar a aquellas personas que cometan faltas y delitos. Cualquier persona que cometa conductas delictivas debe ser sujeta a proceso, a fin de que sus actos sean investigados y, de ser el caso, sancionados, pero siempre en el marco del derecho y del respeto a los derechos humanos. Asimismo, las conductas desplegadas por los agentes aprehensores encaminadas a acreditar la responsabilidad de las personas inculpadas, cuando sean contrarias a la ley, también deben ser motivo de investigación y de sanción, toda vez que de no hacerlo se contribuye a la impunidad.

30. En ese contexto, esta Comisión Nacional considera que la investigación de los delitos es totalmente compatible con el respeto de los derechos humanos, por lo que las instituciones que participan en tareas de seguridad pública, al actuar con profesionalismo, brindan a las víctimas del delito el goce efectivo del derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño, contribuyendo a desterrar la impunidad.

31. Debe considerarse que toda conducta violatoria de derechos humanos debe ser investigada y sancionarse de manera proporcional a la conducta de las personas servidoras públicas responsables, a las circunstancias y a la gravedad en que ocurrieron los hechos violatorios. Nadie puede ni debe evadir la responsabilidad

administrativa y penal cuando se acredite que cometió violaciones a derechos humanos¹.

32. Cabe precisar que tratándose de hechos en los que haya intervenido más de una persona servidora pública, se hace necesario investigar el grado de intervención de todos y cada uno de ellos, a fin de identificar quién o quiénes actuaron en calidad de autores o partícipes, así como la cadena de mando correspondiente².

33. En este apartado, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 132 de su Reglamento Interno, se realiza un análisis de los hechos y las pruebas que integran el expediente **CNDH/2/2022/4102/VG**, con un enfoque lógico-jurídico de máxima protección de la víctima conforme al bloque constitucional de protección de derechos humanos, que comprende los estándares nacionales e internacionales en la materia, de los precedentes emitidos por esta Comisión Nacional, así como de los criterios jurisprudenciales aplicables, tanto de la SCJN como de la CrIDH, para determinar las violaciones graves al derecho humano a la seguridad jurídica, al trato digno y a la integridad personal en agravio de VD por actos de tortura.

¹ CNDH, Recomendaciones 86/2021 párr. 23; 7/2019 párr. 142; 85/2018, párr. 143; 80/2018, párr. 32; 67/2018, párr. 34; 74/2017, párr. 46, entre otras.

² CNDH, Recomendaciones 86/2021 párr. 24; 7/2019 párr. 46; 85/2018, párr. 143, y 80/2018, párr. 32.

A. Calificación de los presentes hechos como violaciones graves a los derechos humanos

34. El Estado mexicano está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; la vulneración de los derechos a la dignidad e integridad personal, suponen una violación grave a los derechos humanos. El artículo 102, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a esta Comisión Nacional para investigar violaciones graves a los derechos humanos.

35. A nivel internacional, la CrIDH en la sentencia del *Caso Rosendo Radilla vs. México*, párrafo 139, estableció tres criterios para la calificación de violaciones graves: a) que haya multiplicidad de violaciones en el evento; b) que la magnitud de las violaciones esté relacionada con el tipo de derechos humanos violentados; y, c) que haya una participación importante del Estado (sea activa u omisiva).

36. En el ámbito nacional, la SCJN ha fijado un doble parámetro sobre la base de que se compruebe la trascendencia social de las violaciones: a) la gravedad de los tipos de violaciones cometidas -criterio cualitativo-, y b) la cantidad de personas afectadas por la actuación de la autoridad -criterio cuantitativo-³.

37. En concordancia a lo anterior, el artículo 88 del Reglamento Interno de esta Comisión Nacional y la “Guía para identificar, atender y calificar violaciones graves a los derechos humanos y para la atención de las víctimas de esta”, establecen que los atentados a la vida constituyen una infracción grave a los derechos fundamentales de la persona, y para calificar la gravedad de un hecho violatorio a

³ Amparo en revisión 168/2011, 30 de noviembre de 2011

derechos humanos se debe considerar: a) la naturaleza de los derechos humanos violados; b) la escala/magnitud de las violaciones; y, c) su impacto.

38. En opinión de esta Comisión Nacional, en el presente caso se actualizan los supuestos de violaciones graves a derechos humanos establecidos en los estándares internacionales, en atención a que los derechos vulnerados son los básicos e indiscutibles del respeto a cualquier persona, en sus ámbitos físico y mental, en un régimen de respeto al Estado de derecho, como son los relacionados con la dignidad humana y la integridad de las personas, conforme a las siguientes consideraciones.

B. Violación a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de VD

39. El derecho a la integridad personal es aquel que tiene toda persona para no ser objeto de vulneraciones a su persona, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento graves con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero. Se encuentra previsto en los artículos 1º, 16, párrafo primero, 18 y 19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el primer precepto se reconoce que todas las personas son titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado mexicano sea parte, y en los siguientes preceptos queda previsto el derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo cual incluye el deber de las personas servidoras públicas de salvaguardar su integridad personal.

40. Toda persona tiene derecho al trato digno reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 1º constitucional, párrafo quinto, dispone que *“queda prohibida toda discriminación motivada por [...] cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”*.

41. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, establece como uno de los fines del desarrollo nacional a cargo del Estado, garantizar el pleno ejercicio de la dignidad de las personas.

42. Al respecto, la SCJN emitió la siguiente tesis:

“DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna [...] que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada [...] constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho [...] a la integridad física y psíquica [...] al libre desarrollo de la personalidad [...] y el propio derecho a la dignidad personal [...] aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución [...] están implícitos en los tratados internacionales suscritos [...] y, en todo caso, deben entenderse

como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad”⁴.

43. El artículo 1º de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, puntualiza: *“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.*

44. Así mismo, el artículo 6, fracción I, de la referida Ley establece que el principio de la dignidad humana se entiende como el respeto inherente a toda persona como condición y base de todos los derechos humanos y de manera específica del derecho a la integridad personal, como el bien jurídico principal que se tutela frente al acto ilícito de la tortura.

45. El derecho humano a la integridad personal implica que cualquier persona tiene derecho a que sea protegida su integridad física, psicológica y a ser tratada con dignidad. En este tenor, la SCJN emitió la siguiente tesis:

“DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. *La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de*

⁴ Gaceta Registro 165813, Instancia: Pleno, Tesis Aislada Constitucional; fuente: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, Tomo 1, 9ª época, diciembre de 2009.

las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal, así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos”⁵.

46. Los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como I y XXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y en los principios 1, 2 y 6 del *Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión*, de la ONU, coinciden en que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y a no ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes con motivo de la privación de su libertad.

⁵ Registro 163167, Instancia: Pleno, Tesis Aislada Constitucional, Penal; fuente: *SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA*, Tomo XXXIII, 9ª época, enero de 2011.

47. Los artículos 1, 2 y 16.1 de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”, de la ONU; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; así como, 1, 2, 3, 4, 6 y 8 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la ONU, señalan la obligación del Estado para impedir todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, lo que conlleva a la protección de la dignidad, la integridad física y psicológica de la persona.

48. Conforme a los artículos 1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, de la ONU, y 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura: *“se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”*.

49. La protección de este derecho, a través de la prohibición absoluta de la tortura física y psicológica, ha alcanzado el estatus de *ius cogens* (derecho imperativo u obligatorio) internacional, en la jurisprudencia de la CrIDH y de otros tribunales internacionales de derechos humanos.

50. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Observación General 20, de 10 de marzo de 1992, dispuso que el derecho a la integridad personal protege a los individuos de daños físicos o mentales provocados o que puedan ser ocasionados por una multiplicidad de acciones y omisiones tanto de las autoridades

que hagan uso de sus potestades públicas, de las autoridades que no se encuentren investidas en ese momento de su cargo público, así como de los actos de entes particulares.

51. Lo anterior, se traduce en que, toda persona tiene derecho a que sea protegida su integridad física, psicológica y moral, y no admite de ningún modo que este derecho se vea disminuido o eliminado. Más aún cuando estas personas se encuentran bajo la protección del Estado, que actúa como garante de quienes por cualquier situación están privadas de la libertad⁶.

52. En este sentido, la CrIDH ha establecido que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. En consecuencia, existe la presunción de considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como responsables de tales conductas. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados⁷.

⁶ CNDH, Recomendaciones: 86/2021 párr. 37; 7/2019, párrafo 111; 80/2018, párrafo 43; 79/2018, párrafo 50; 74/2018, párrafo 174; 48/2018, párrafo 87; 74/2017, párrafo 118; 69/2016, párrafo 138; entre otras.

⁷ CrIDH, *Caso Baldeón García Vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147.

53. La CrIDH ha señalado: *“La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Dicha prohibición subsiste aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”*⁸. Lo anterior significa que en ningún contexto se justifica la tortura.

54. La CrIDH, en los casos *Inés Fernández Ortega vs. México*, sentencia de 30 de agosto de 2010, párrafo 120; *Valentina Rosendo vs. México*, sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 110; *López Soto y otros vs. Venezuela*, sentencia de 26 de septiembre de 2018, párrafo 186, y *Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México*, sentencia de 28 de noviembre de 2018, párrafo 191; en términos del artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y conforme a la definición establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura ha establecido que se está frente a un acto de tortura cuando el maltrato cumple con los siguientes requisitos: *“i) es intencional; ii) causa severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se comete con determinado fin o propósito”*.

55. Por otra parte, la Primera Sala de la SCJN determinó los elementos constitutivos del acto de tortura, en los siguientes términos:

“TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o

⁸ CrIDH, Caso *Bueno Alves vs. Argentina*, párrafo 76.

mentales graves; ii) éstas sean infligidas intencionalmente; y iii) tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona”⁹.

56. En consecuencia, se procederá al análisis de las pruebas con la finalidad de acreditar y evidenciar que VD fue víctima de actos de tortura durante el tiempo en que se mantuvo a resguardo por elementos de SEDENA.

57. La violación a los derechos humanos de VD se encuentra acreditada con el contenido de los documentos siguientes:

57.1 Escrito de queja de Q1 y Q2, recibido en esta Comisión Nacional el 21 de abril de 2022, en el que indica que VD, fue torturado y privado de su libertad, por elementos de la SEDENA.

57.2 Escrito de ampliación de queja de VI, recibido en este Organismo Nacional el 04 de mayo de 2022, mediante el cual manifestó que VD, fue sujeto a actos tortura por sus captores, elementos de la SEDENA.

57.3 Oficio DH-I-9226, de 22 de agosto de 2022, mediante el cual la SEDENA, informo del ingreso de VD a las instalaciones del 28/o. Batallón de Infantería (Aguaje de la Tuna, Baja California).

57.4 Certificado Médico emitido por AR2 de fecha 27 de abril de 2008, del que se advierte que VD “...se opina que el presente caso se trata de [REDACTED] por proyectil de arma de fuego, así como [REDACTED]”

⁹ Tesis. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, febrero de 2015, Registro 2008504.

[REDACTED]

[REDACTED]

57.5 Dictamen Médico Forense Especializado, para determinar un posible o probable caso de maltrato cruel, inhumano y degradante tanto físico como mental, conocido técnicamente como actos de Tortura, de 7 de junio de 2012, suscrito por PMF, donde se analizaron los padecimientos y sintomatologías que presentó VD, derivados de las circunstancias que atravesó al momento de su detención, el cual fue presentado ante el Juzgado Sexto de Distrito el 26 de julio de 2012.

58. Se concluye que VD fue sujeto a actos de tortura por parte de AR1 y demás elementos militares que hayan participado en los hechos, por consiguiente, le fue violentado su derecho a la integridad personal. En el presente caso, la obligación de los servidores públicos involucrados consistía en conducir sus actos con estricto apego a derecho.

59. Del análisis de los escritos de queja presentados por Q1, Q2 y VI, así como de las evidencias que integran el expediente de queja, se desprende que VD refirió que el 25 de abril del año 2008, alrededor de las 22:30 horas, al ir conduciendo a la altura Del Cañaveral, Tijuana, Baja California, se vio envuelto en una balacera, resultando herido por balas perdidas mientras iba conduciendo, por lo que al bajar del vehículo y al tratar de resguardarse sintió otro disparo; solicitó auxilio y lo llevaron a la Cruz Roja, llegaron elementos de la SEDENA, y lo trasladaron al Hospital General; el 26 de abril de 2008 lo trasladaron al cuartel militar en el 28/o Batallón de Infantería, ubicado en Aguaje de la Tuna, Baja California, lo ingresaron en una habitación, señalando a los elementos de la SEDENA como quienes le

infligieron actos de tortura, desde [REDACTED]
[REDACTED], las cuales constan en dictamen especializado.

60. En el Certificado Médico, sin número, de 27 de abril de 2008, firmado por AR2, se especifica que VD presentaba: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

61. Del dictamen Médico Forense Especializado, para determinar un posible o probable caso de maltrato cruel, inhumano y degradante tanto físico como mental, conocido técnicamente como actos de Tortura, de 7 de junio de 2012, suscrito por PMF, se desprende que VD presentaba: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] *durante el lapso de tiempo comprendido desde su detención, traslado, custodia e “investigación” a la que fue sometido [...] que le produjeron [REDACTED] importante [...] el estado más probable de las facultades mentales superiores de [VD], en el lapso de tiempo citado, en que fue torturado, era de un [REDACTED]*

[REDACTED]
[REDACTED],

por lo que, en estas circunstancias, actuó bajo sobre-presión psíquica, y por lo tanto su conducta no le fue propia y de serlo fue contraria a su propia capacidad volitiva (voluntad) [...] las alegaciones de tortura, por parte de [VD], son coherentes con los resultados de los exámenes médicos practicados, constatándose que existen hallazgos objetivos sobre [REDACTED]

[REDACTED]; además, también encontré evidencias subjetivas sobre intento de

[REDACTED] y otras formas referidas de tratos crueles e inhumanos y en el aspecto psíquico; a las constantes amenazas con amagos de ejecución contra su persona; y a las [REDACTED]

[REDACTED]”. Concluyendo que VD fue torturado, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, al ser sujeto de ataques psíquicos y tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el fin de obtener información y/o confesión.

62. Esta Comisión Nacional ha sostenido que las agresiones desplegadas por los elementos militares, al ser desarrolladas bajo un rol de dominio, los colocó en una situación de poder frente a VD, con la consecuente vulnerabilidad a su integridad física y psicológica. Con tales hallazgos, respecto de los actos que fueron realizados por AR1 y AR2¹⁰ y demás elementos militares se tiene acreditada la tortura en agravio de VD como a continuación se expone:

¹⁰ Conducta de elaboración de dictamen médico con el cual se pretendió encubrir los actos de tortura cometidos en agravio de VD, y con ello se es partícipe de la tortura.

B.1. Elementos que acreditan la tortura

- **Intencionalidad**

63. Al analizar si los actos de AR1 y demás miembros militares que participaron cumplen con los elementos que confirman los actos de tortura que se citan en la presente Recomendación, se acredita que el maltrato fue deliberadamente causado en contra de VD, por las agresiones físicas y psicológicas que le fueron inferidas; las cuales pusieron en riesgo su integridad a causa de las agresiones físicas y mentales que le propinaron los elementos de la SEDENA.

64. Conforme al párrafo 145 del “Protocolo de Estambul”, entre los métodos de tortura que deben tenerse en cuenta, figuran los siguientes: “a) *Traumatismos causados por golpes, como puñetazos, patadas, tortazos, latigazos, golpes con alambres o porras o caídas* [y] p) *las amenazas de muerte, daños a la familia, nuevas torturas, prisión y ejecuciones*”.

65. Todos los métodos enunciados fueron narrados de forma coincidente por VD, en los escritos de queja y ampliación de queja, y ante personal de esta Comisión Nacional, por lo que le fueron producidas con la intencionalidad de lastimarlo y degradarle su fuerza de voluntad; asimismo, refirió diversas amenazas a su familia por las personas servidoras públicas de la SEDENA que lo tenían sometido y bajo su custodia.

- **Sufrimiento severo**

66. En cuanto al sufrimiento severo VD narró haber experimentado intimidación y amenazas tanto a su integridad personal como a su familia por parte de AR1 y demás elementos militares, a través de agresiones físicas y psicológicas; lo que,



_____, por el constante _____
diferentes agentes físicos _____, que le causan _____
_____ además, también encontré evidencias subjetivas sobre

67. Los datos clínicos y sintomatologías que presentó VD hacen patente la presencia de [REDACTED], el cual es permanente, pues aún persiste en su persona, lo que corresponde y concuerda con los hechos referidos al momento de su detención, concordante con lo previsto en el “Protocolo de Estambul”, ya que en este documento se entiende por “tortura” todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que cometió, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

- **Fin específico**

68. En cuanto al elemento del fin específico, se advierte que las agresiones físicas y psicológicas que le fueron infligidas a VD tenían como finalidad que confesara hechos ilícitos, ya que expresaron ante el especialista psicológico y ante personal de esta Comisión Nacional que [REDACTED] a fin de disminuirle su capacidad de respuesta, lo cual lograron, pues al rendir su declaración aceptó los delitos que le imputaron, ya que firmó diversos documentos para autoinculparse.

69. En suma, al haberse acreditado las tres condiciones —intencionalidad, sufrimiento severo y finalidad—, se concluye que VD fue objeto de actos de tortura por parte de AR1 y demás personal involucrado que deberá ser identificado mediante una investigación exhaustiva, y con ello dichos elementos fueron corresponsable de la custodia y seguridad de VD durante su retención y traslado;

con lo cual se acredita, de igual manera, que le fue violentado su derecho a la integridad personal.

70. En el presente caso, la obligación de AR1 y demás personal involucrado, consistía en conducir sus actos con estricto apego a derecho.

71. Las agresiones desplegadas por AR1 al ser desarrolladas bajo un rol de dominio, los colocó en una situación de poder frente a VD, con la consecuente vulnerabilidad a su integridad física y psicológica.

72. La tortura que sufrió VD constituye un atentado a su seguridad y dignidad personal, previsto en los artículos 1°, 16, párrafos primero, 19, párrafo último, y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; así como, 5.1 y 5.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 24, fracción I de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; que señalan que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, esto es, que toda persona privada de la libertad deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

73. Asimismo, en los artículos 1, 2, 6.1, 6.2, 12, 13, 15, y 16.1, de la Convención contra la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes; 1 y 6 del *Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión*; se establece que ningún sujeto que se encuentre en cualquier forma de detención o prisión será sometido a tratos crueles y no podrá invocarse circunstancia alguna para justificar éstas. Finalmente, los artículos 2, 3 y 5 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer

cumplir la ley; todos de la ONU advierten que ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden superior o circunstancias especiales como justificación de tales prácticas, así como que protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

C. Responsabilidad institucional y de las personas servidoras públicas

74. La responsabilidad generada, con motivo de las violaciones a los derechos humanos analizadas y evidenciadas, corresponde a los actos realizados por AR1 por ser responsable del cuartel militar en el 28/o Batallón de Infantería, ubicado en Aguaje de la Tuna en Tijuana, Baja California, lugar donde se realizaron los actos de tortura, así como AR2 por emitir un dictamen médico en que no reportó las lesiones que ya tenía VD con el fin de encubrir los actos de tortura, lo cual lo involucra en los actos de tortura y, en consecuencia, también los demás elementos de la SEDENA, que sean identificados durante las investigaciones respectivas, quienes contravinieron las obligaciones contenidas en los artículos 7 y 8, fracciones I, VI y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, aplicable por la temporalidad de los eventos, que prevén que las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen en el servicio público; tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas, y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de la legalidad, no obstante que las acciones de investigación administrativa se encuentran prescritas, según el contenido del artículo 34 de la Ley en cita.

75. Esta Comisión Nacional destaca la importancia de que las investigaciones en materia penal que se inicien con motivo de la denuncia por las violaciones a derechos humanos acreditadas se lleven a cabo con la debida diligencia, completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos, para determinar la responsabilidad de AR1, así como demás personas servidoras públicas que hayan participado en los hechos y cuya identidad tendrá que investigarse, con el objeto de aplicar efectivamente las sanciones penales que la ley prevé.

76. Si bien es cierto el procedimiento de responsabilidades administrativas prescribió, por tratarse de hechos sucedidos en 2008, aunado que a AR1 no fue posible localizarlo por esta Comisión Nacional, también es cierto que no resulta un impedimento para conocer de las violaciones a derechos humanos y más tratándose de un hecho de tortura, resaltando dicha responsabilidad en las instituciones involucradas, tanto en las que se originaron los hechos violatorios como de las que tienen que reparar el daño, por lo que esta Comisión Nacional permanecerá vigilante de las acciones de investigación conducente que subsistan con el fin de que la autoridad competente esclarezca la participación de cada una de las personas servidoras publicas involucradas en los hechos violatorios a derechos humanos a VD, se sancione conforme a derecho y no vuelvan a ocurrir¹¹.

77. Es indispensable que se realice una investigación penal exhaustiva en la que se considere la totalidad de los hechos de la tortura infligida a VD por los elementos adscritos a la SEDENA, pues esas conductas son reprobables para esta Comisión Nacional y para la sociedad en general; la proscripción de tales conductas es de

¹¹ Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores Públicos aplicada en la temporalidad de los hechos, en los artículos 34 y 35 señalan que prescribirán en tres años contados después del día siguiente en el que se hubieran cometido las infracciones y cinco años para infracciones graves.

interés colectivo y lo que se busca es que no queden impunes, se castigue a las personas responsables y no se repitan.

D. Reparación integral del daño a la víctima y formas de dar cumplimiento

78. Una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad institucional, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, y otra vía es el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo segundo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 1°, párrafos tercero y cuarto, 7, 26, 27 y 61 a 75 de la Ley General de Víctimas, que prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos, atribuible a una persona servidora pública del Estado, la Recomendación que se formule debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, así como las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado debe investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos establecidos en la ley.

79. De conformidad con los artículos 1, 2, fracción I, 7, fracciones II, VI, VII y VIII, 8, 26, 27, 61, 62, 64, fracciones I, II y VII, 67, 68, 73, 74, 75, 88, fracción II, 96, 97, fracción I, 106, 110, fracción IV, 111, 112, 126, fracción VIII, 130, 131 y 152, de la Ley General de Víctimas, es una obligación a cargo de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno el reparar de forma integral a las víctimas por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos que les

causaron, a través de las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición.

80. En los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de los supra citados *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, de la ONU y en diversos criterios de la CrIDH, se establece que para garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos, así como identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.

81. En el “Caso Espinoza González vs. Perú”, la CrIDH resolvió que: “...*toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que la disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado [...] las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos*”.

82. En el presente caso, esta Comisión Nacional considera procedente la reparación integral de los daños ocasionados en los términos siguientes.

i. Medidas de rehabilitación

83. Estas medidas se establecen para facilitar a las víctimas y familiares hacer frente a los efectos sufridos con motivo de las violaciones a sus derechos humanos de conformidad con los artículos 27, fracción II y 62, de la Ley General de Víctimas, así como del artículo 21, de los Principios y Directrices, instrumento antes referido, incluyendo la rehabilitación *“la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales”*.

84. En el presente caso, la SEDENA en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atendiendo a la Ley General de Víctimas, deberá colaborar para la atención médica y psicológica que requiera VD y VI, a consecuencia de las acciones u omisiones que dieron origen a la presente Recomendación, debiendo otorgarse por personal profesional especializado y de forma continua, atendiendo a sus necesidades específicas.

85. Esta atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y, ofreciendo información previa, clara y suficiente, con enfoque diferencial y especializado en todo momento, con su consentimiento previo. Los tratamientos deben ser provistos por el tiempo necesario, incluyendo la provisión de medicamentos y, en su caso, de aditamentos e instrumental médico, en caso de requerirlos. Lo anterior, para dar cumplimiento al punto recomendatorio segundo.

ii. Medidas de compensación

86. La compensación consiste en reparar el daño causado, sea material o inmaterial. El daño inmaterial, como lo determinó la CrIDH, comprende: *“...tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el*

menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”¹².

87. Conforme al artículo 27, fracción III, y 64 de la Ley General de Víctimas, en el presente caso ha de otorgarse a las víctimas de forma apropiada y proporcional a la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos.

88. Para ello, la SEDENA deberá colaborar en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de VD y VI, a través de la noticia de hechos que se realice a esa Comisión Ejecutiva con la presente Recomendación, y que esté acompañada de los Formatos Únicos de Declaración de la CEAV, y una vez que ésta emita el dictamen correspondiente conforme a los hechos y las violaciones a derechos humanos descritas y acreditadas en el presente instrumento recomendatorio, proceda a la inmediata reparación integral del daño a VD, que incluya la medida de compensación, en términos de la Ley General de Víctimas. Lo anterior, para dar cumplimiento al punto recomendatorio primero.

iii. Medidas de satisfacción

89. De acuerdo con el artículo 27, fracción IV, y 73 de la Ley General de Víctimas, las medidas de satisfacción buscan reconocer y establecer la dignidad de las

¹² CrIDH, *Caso Palamara Iribarne Vs. Chile*, Sentencia del 22 de noviembre de 2015. Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 244.

víctimas, teniendo como finalidad el esclarecimiento de los hechos y el reconocimiento de la responsabilidad por las violaciones a derechos humanos a cargo de las personas servidoras públicas involucradas o relacionadas con los hechos, para lo cual es indispensable la investigación y eventual sanción de los responsables.

90. La SEDENA deberá colaborar en la integración y seguimiento de la Carpeta de Investigación por el delito de tortura en agravio de VD, cuyo trámite corre a cargo de la FGR. Este punto se dará por cumplido cuando se acredite que la SEDENA, con posterioridad a la emisión de la presente Recomendación, está colaborando y proporcionando a las instancias investigadoras información completa y necesaria para que se llegue al esclarecimiento y a la verdad de los hechos. Lo anterior, para dar cumplimiento al punto recomendatorio tercero.

91. La formulación y publicación de la presente Recomendación, en sí misma constituye una medida de satisfacción, ya que esta tiene como fin dar a conocer las violaciones a derechos humanos que se cometieron en agravio de VD.

iv. Medidas de no repetición

92. Esta Comisión Nacional considera que las garantías de no repetición previamente descritas constituyen una oportunidad para las autoridades a fin de fortalecer una sociedad más justa, libre y respetuosa de la dignidad humana, mediante la realización de las acciones señaladas y por consecuencia, sumarse a una cultura de la paz, legalidad y respeto a los derechos humanos que conjuntan valores, actitudes y comportamientos para su protección y garantía, así como la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, con la finalidad

de evitar hechos similares a los analizados en el presente instrumento recomendatorio.

93. Tienen como objetivo que el hecho punible o la violación a derechos humanos sufrida por las víctimas no vuelvan a ocurrir, esto es que la SEDENA deberá implementar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención, por ello, deberá adoptar todas las medidas legales y administrativas y de otra índole para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas.

94. No obstante que actualmente AR1 no fue posible localizarlo por esta Comisión Nacional, en los términos del párrafo anterior, y con apoyo en los artículos 27, fracción V, y 74 de la Ley General de Víctimas, la SEDENA deberá emitir una circular dentro del término de tres meses, contados a partir de aceptación de la presente Recomendación, dirigida a las personas servidoras públicas de esa Secretaría, que realicen actividades operativas en el lugar de los hechos de la presente Recomendación; esto es, en Tijuana, Baja California, en la cual, solicite que toda actividad que realice referente a la detención y puesta a disposición ante la autoridad respectiva debe ser en estricto cumplimiento a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, principalmente respecto a las acciones que deben realizar sobre prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior, para dar cumplimiento al punto recomendatorio cuarto.

95. En razón a lo anterior, esta Comisión Nacional considera que las garantías de no repetición previamente descritas constituyen una oportunidad para que las autoridades en su respectivo ámbito de competencias, a fin de fortalecer una

sociedad más justa, libre y respetuosa de la dignidad humana, mediante la realización de las acciones señaladas y por consecuencia, sumarse a una cultura de paz, legalidad y respeto a los derechos humanos que conjunten valores, actitudes y comportamientos para su protección y garantía, así como la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, con la finalidad de evitar hechos similares a los analizados en el presente instrumento recomendatorio.

96. En la respuesta que se dé a esta Comisión Nacional de la presente Recomendación, se pide atentamente se señalen las acciones que habrán de iniciar o realizar para atender cada uno de los puntos recomendatorios.

97. En consecuencia, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se permite formular respetuosamente a usted, Secretario de la Defensa Nacional, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Colaborar en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de VD y VI, a través de la noticia de hechos que se realice a esa Comisión Ejecutiva con la presente Recomendación, acompañada de los Formatos Únicos de Declaración de la CEAV, y una vez que ésta emita el dictamen correspondiente conforme a los hechos y las violaciones graves a derechos humanos descritas y acreditadas en el presente instrumento recomendatorio, proceda a la inmediata reparación integral del daño a VD y VI, que incluya la medida de compensación, en términos de la Ley General de Víctimas. Hecho lo cual, se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se otorgue la atención médica y psicológica que requieran VD y VI, por los hechos y las violaciones a derechos humanos acreditadas, la cual deberá brindarse por personal especializado y de forma continua, atendiendo a su edad y necesidades; así como proveerle, en caso de que requiera, los medicamentos e instrumentos convenientes a su situación individual. La atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible, con su consentimiento. Hecho lo anterior, se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

TERCERA. Colaborar ampliamente en la investigación y seguimiento de la Carpeta de Investigación, misma que actualmente se integra en la FGR, a fin de que se investigue y determine conforme a derecho la responsabilidad de AR1, AR2 y demás elementos militares, que sean identificados durante las investigaciones respectivas, quienes hayan participado en los hechos; por lo cual, se deberán remitir a esta Comisión Nacional las pruebas de su cumplimiento.

CUARTA. En el término de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se emita una circular, dirigida a las personas servidoras públicas de esa Secretaría que realicen actividades operativas en el lugar de los hechos de la presente Recomendación, esto es, en Tijuana, Baja California, en la cual, solicite que toda actividad que se realice referente a la detención y puesta a disposición ante la autoridad respectiva, debe ser en estricto cumplimiento a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, principalmente respecto a las acciones que deben realizar sobre prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

hecho lo cual, se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

QUINTA. Designe a la persona servidora pública de alto nivel de decisión que se desempeñe como enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento oportuno de la presente Recomendación y, en caso de ser sustituido, deberá notificarse de ello a este Organismo Nacional.

98. La presente Recomendación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por personas servidoras públicas en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1º, párrafo tercero, Constitucional Federal, la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier otra autoridad competente para que, conforme a sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

99. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional, se solicita que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, sea informada dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación.

100. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico se solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta Comisión Nacional en el plazo de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre su aceptación.

101. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o personas servidoras públicas, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 15, fracción X, y 46, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante ello este Organismo Nacional solicitará al Senado de la República, en sus recesos a la Comisión Permanente de esa Soberanía, que requieran su comparecencia, para que expliquen los motivos de su negativa.

PRESIDENTA

MTRA. MA. DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA

OJPN